

**EXPERIENCIAS DE INCIDENCIA POLÍTICA DE LA SOCIEDAD
CIVIL EN EL NORTE DE ÁFRICA**

***EXPERIENCES OF POLITICAL ADVOCACY OF CIVIL SOCIETY IN
THE NORTH OF AFRICA***

Laurence Thieux

TRABAJO SOCIAL GLOBAL 2014, 4 (6), 31-48

Resumen

Este artículo analiza el papel de las organizaciones de la sociedad civil en los procesos de transformación política de varios países del Norte de África. A través de diferentes casos de estudios se analizan experiencias concretas de incidencia política así como su rol en los procesos de movilización colectiva que han impulsado los procesos de reforma o transformación política en estos países. Lejos de presentar un panorama homogéneo, las “primaveras” han acentuado las disparidades y la heterogeneidad que caracteriza la evolución política de las sociedades norteafricanas. Mientras que algunos países han mantenido sus sistemas políticos autoritarios (Argelia), otros han conseguido mantener las estructuras y equilibrios de poderes al adoptar reformas sin cambiar la naturaleza del sistema (Marruecos). Otros (Túnez y Egipto) están inmersos en complejos procesos de transición en los cuales las organizaciones de la sociedad civil han tenido mayor o menor influencia según el caso.

Abstract

This article analyses the role of civil society in the process of political transformation in several countries in North Africa. Through different case studies, concrete experiences of advocacy strategy and the role of CSO in the mobilization of collective actions that have driven reform processes or political transformation in these countries are highlighted. Far from presenting a homogeneous scenario, "Arab Springs" have accentuated disparities and divergences in the political evolution of the North African societies. While some countries have maintained their authoritarian political systems (Algeria), others have managed to maintain the structures and balances of powers and they have tried to adopt reforms without changing the nature of the system (Morocco). Others (Tunisia and Egypt) are involved in complex processes of transition in which civil society organizations have had varying influence accordingly.

PC.- sociedad civil, transiciones democráticas, Norte de África, incidencia política, derechos humanos
KW.- *civil society, democratic transitions, North Africa, advocacy, Human Rights*

Introducción

En los procesos de cambio que están transformando las sociedades del Norte de África las organizaciones de la sociedad civil (OSC) han desempeñado un papel clave. Este tejido heteróclito compuesto de asociaciones, organizaciones sindicales, movimientos sociales y otros colectivos desarrollan sus actividades en contextos políticos, económicos y sociales muy diversos que ofrecen perspectivas de estudio interesantes para profundizar en el análisis del impacto de las acciones de la sociedad civil en los cambios en curso en la región desde el inicio de las llamadas “primaveras árabes”.

Dada la amplitud del concepto de sociedad civil y la diversidad de interpretaciones sobre su naturaleza y función democratizadora, es importante basar el análisis en el conocimiento de las trayectorias, estrategias, acciones de las OSC, así como en las relaciones que mantienen con los diferentes actores institucionales, políticos, económicos y sociales en cada contexto.

Las “revoluciones árabes” no son de generación espontánea: las organizaciones de la sociedad civil, los movimientos sociales y los actores que han protagonizado estas nuevas formas de acción colectiva llevan años trabajando y movilizándose. Han preparado el terreno y la ciudadanía para cuestionar la legitimidad de los gobiernos autoritarios que han dominado los sistemas políticos de los países del Norte de África desde el logro de sus independencias. Conviene señalar también que el impacto de las acciones de la sociedad civil depende también de la naturaleza del entramado político-militar y económico que sustenta el sistema de gobierno contra el cual se movilizan. El balance de los tres años que han seguido el derrocamiento de los dictadores en Libia, Túnez y Egipto pone de manifiesto esta diversidad de escenarios: el retorno del ejército a la cabeza del Estado (Egipto); los avances logrados en Túnez en el proceso de transición con la adopción de la nueva Constitución en enero de 2014; la caótica situación que vive Libia.

La existencia de una sociedad civil, dinámica, independiente y diversa constituye una baza fundamental para lograr que los procesos de transición política lleguen a buen puerto. Las acciones de las OSC, aunque de alcance limitado y protagonizadas por unos pocos actores, van calando en la sociedad y contribuyen a la emergencia de una nueva conciencia social. En muchos casos llevan años luchando para impulsar reformas y cambios en el seno de la sociedad a través de la sensibilización y la incidencia política. Las plataformas como Kifaya o el movimiento 6 de abril que se dieron a conocer en Egipto a partir de 2005 fueron precursores de la movilización popular de la plaza Tahrir que acabó con el régimen de Mubarak en Egipto. Las organizaciones de mujeres, de derechos humanos, el sindicato la Unión General de los Trabajadores Tunecinos (UGTT), los abogados y magistrados en Túnez mantuvieron un frente de oposición a la dictadura de Ben Ali y tuvieron un papel clave en las protestas de 2011 al darles respaldo y articulándolas. En Marruecos las organizaciones de derechos humanos y de defensa de los derechos de las mujeres, por citar sólo unas pocas, tienen una larga trayectoria de incidencia política y a través de la formación y la sensibilización han contribuido a concienciar una nueva generación, protagonista de las nuevas dinámicas de acción colectiva como el Movimiento 20 de Febrero.

En el presente artículo se analizará el papel de la sociedad civil en los complejos procesos de cambio que atraviesan las sociedades norteafricanas a través de diferentes ejemplos y casos concretos que abarcan países y temporalidades distintos. Recordaremos en primer lugar, las experiencias de movilización y acción de la sociedad civil previas a la revolución tanto en Túnez como en Egipto. En segundo lugar, nos fijaremos en el papel que ha tenido la sociedad civil tunecina en el complejo proceso de transición política que ha iniciado el país desde la caída de Ben Alí. En tercer lugar, analizaremos la situación de la sociedad civil en contextos autoritarios y las dificultades que presenta un entorno tan poco favorecedor como el de Argelia para la acción de las OSC, aunque a raíz de la candidatura de Abdelaziz Buteflika para un cuarto mandato están surgiendo iniciativas interesantes como el de “Barakat”. Finalmente, abordaremos los espacios políticos “semi-autoritarios” donde la sociedad civil ha podido desarrollar una acción de incidencia política clave pero sin alterar la naturaleza del sistema político como es el caso de Marruecos. Nos fijaremos en los espacios de diálogo institucionales creados por el gobierno en el contexto de las reformas políticas adoptadas desde el 2011.

I. El papel de la sociedad civil en las fases previas a las “revoluciones”

Dos de las condiciones para que haya una acción colectiva son, por un lado, que haya vínculos entre los que contestan al sistema político establecido y que, por otro lado, los canales de comunicación con el Estado y los gobernantes se hayan roto o sean inexistentes. La base organizativa es al mismo tiempo necesaria para que la protesta se mantenga en el tiempo (Oberschall, 1973). El proceso de movilización popular en Túnez desencadenado por la inmolación del joven Bouazizi (International Crisis Group, 2011), pone en evidencia los mecanismos y factores que han permitido la extensión de los diferentes focos de protestas y su expansión a toda la geografía nacional. Muchos actores de la sociedad civil se movilizaron: magistrados, organizaciones de derechos humanos y activistas jóvenes junto con colectivos de diplomados desempleados a los que se sumaron las ramas locales de la organización sindical (UGTT), que a diferencia de la cúpula dirigente respaldaron las protestas desde el inicio, aportando sus recursos y experiencias en este ámbito (Beinin y Vairel 2011). En algunas localidades como Kasserine el sindicato puso autobuses a disposición de los manifestantes para llevarles a Thela otra localidad cercana. La articulación de sus acciones ha sido clave para impulsar el levantamiento popular contra el régimen. La UGTT ha sido esencial para que la revolución adquiriera la dimensión social y geográfica que ha llegado a tener y las huelgas generales convocadas en Qairuán y en Túnez capital tuvieron un impacto decisivo en precipitar la caída del régimen (López García, 2011).

Tanto en Egipto como en Túnez hubo importantes movilizaciones sociales en los años anteriores que sentaron precedentes importantes para las futuras protestas. Al principio del año 2008, estallaban en la cuenca minera de Gafsa unas protestas sociales que contaron con la participación de una gran diversidad de colectivos: madres de familias, adolescentes, diplomados desempleados y militantes sindicales que durante meses desafiaron el régimen (Chouikha y Geisser 2010). Lo llamativo de estas revueltas es que las reivindicaciones iniciales de carácter laboral adquirieron un carácter más político que consiguió que otros actores se solidarizaran con su lucha. En Egipto, el movimiento obrero también desempeñó un papel clave: decenas de miles de trabajadores de los sectores del textil, de la industria militar, del transporte, de la salud, los trabajadores del canal de Suez participaron en las huelgas y protestas que precedieron la salida de Mubarak. Estas movilizaciones sociales permitieron a los actores de la sociedad civil ensayar mecanismos de movilización y protesta y agrietar la barrera del miedo que finalmente derrumbarían a principios de 2011.

La sociedad civil egipcia fue revitalizada en los ochenta cuando aparecieron nuevos grupos de activistas persiguiendo objetivos políticos. Para contrarrestar la influencia de estos grupos, las autoridades gubernamentales crearon su propia sociedad civil, los GONGOS (Elagati, 2012). El régimen egipcio adoptó medidas legales represivas y otorgó a las autoridades administrativas poderes discrecionales respecto al proceso de creación de las asociaciones, la regulación de sus actividades, su financiación o su vinculación con redes y coaliciones internacionales.

A pesar de un entorno político y legal represivo, se produjo una mutación del espacio público en la medida en que junto con la presencia de organizaciones dependientes y controladas por el Estado, surgieron colectivos civiles que han ido ensanchando espacios de autonomía respecto a los poderes públicos. Es a partir del año 2000 cuando en Egipto empieza a fortalecerse el papel de estos diferentes colectivos volcados en las movilizaciones sociales y políticas. El campo asociativo empezó a expandirse geográficamente y con una mayor diversidad temática (Ben Néfissa, 2011). Aparecieron nuevos espacios de reivindicaciones permitidos en la medida en que no cuestionaban directamente la legitimidad del poder establecido. Uno de ellos se creó en torno a la solidaridad con la causa Palestina que ha sido siempre un motor de movilización popular importante en el mundo árabe¹. Las primeras demostraciones públicas del movimiento Kifaya datan del 2004, cuando ya manifestaban su oposición a la intención de Mubarak de presentarse a un quinto mandato presidencial y a los preparativos para la sucesión de su hijo Gamal (Beinin 2011). Este colectivo formado por un pequeño grupo de activistas centrado en la reivindicación democrática ha sido muy importante al mostrar cómo utilizando los medios de comunicación y gracias al apoyo de la opinión pública internacional podía pese a su reducida dimensión tener un impacto relevante.

Mientras que el Banco Mundial celebraba las reformas emprendidas por el gobierno egipcio² con la aplicación del Plan de Ajuste Estructural, los estragos sociales de las políticas neoliberales y el empeoramiento de las condiciones económicas y sociales de la mayoría de la población desembocaron en crecientes movilizaciones sociales y huelgas de los trabajadores en diferentes sectores como en el del textil (huelga de Ghazal Mahalla). Al margen del sindicato oficial, aparecieron nuevas organizaciones de sociedad civil apoyando la emergencia de fuerzas sindicales independientes a través de la formación y el apoyo logístico³. La huelga de Ghazal al-Mahalla desencadenada en abril de 2008, marcó un hito en la medida en que lo que en un principio empezó como una reivindicación económica y social

acabó teniendo un marcado carácter político. La movilización logró extenderse con el apoyo de diferentes partidos de la oposición y de colectivos como Kifaya. De esta experiencia nació el movimiento del 6 de abril que tuvo un papel destacado en las protestas de enero de 2011 (Barreñada, 2011).

Las experiencias de contestación previas a las “revoluciones” han sido fundamentales en la medida en que han servido de caldo de cultivo para una nueva generación de militantes y han permitido ensayar también mecanismos de articulación y coordinación entre diversos actores, unas experiencias claves para desenclavar las protestas y darles una dimensión nacional. La lucha por los derechos económicos y sociales ocupó un lugar central en las protestas antes del 2011 y también en las “revoluciones”. Éstas con lemas como “dignidad y justicia social” contestaban la legitimidad del poder y el contrato social tácito establecido entre los pueblos y sus gobernantes tras el logro de las independencias. La sociedad civil ha cuestionado los términos de este contrato sustituyéndolo por un discurso nuevo con un enfoque de derechos y libertades. El lema que se oyó en todas las manifestaciones de la “primavera árabe” “El shaab yurid... el pueblo quiere”, es un indicador de esta transformación profunda en la cual el pueblo pasa de objeto a sujeto activo.

II. La sociedad civil tunecina y la transición democrática

La sociedad civil tunecina está inmersa en el complejo proceso de transición política y ha ejercido presiones sobre las fuerzas políticas para que no se desviaran de los objetivos de la revolución. En los primeros meses que siguieron la caída de Ben Ali, el movimiento popular que había al origen de las protestas logró estructurarse con la constitución del Frente del 14 de enero de 2011⁴. El Frente logró la destitución del primer gobierno de la transición (Béji Caid Essebsi) y rechazó el marco constitucional vigente, pronunciándose a favor de la elección de una asamblea constituyente. Esta estructura se amplió en febrero con la creación del Consejo Nacional para la Protección de la Revolución (CNPR) formado por varias comisiones con el objetivo de pilotar la transición democrática: la comisión superior para la reforma política presidida por Yadh Ben Achour; la comisión sobre las exacciones y represión; la comisión sobre las malversaciones financieras.

Tras esta primera fase las organizaciones de defensa de los derechos humanos como el Conseil National des Libertés en Tunisie (CNLT), l'Association Tunisienne des Femmes Démocrates (ATFD), la Ligue Tunisienne des Droits de l'Homme (LTDH) entre otras siguieron luchando para incrementar el nivel de representatividad del Consejo y consiguieron que se ampliara de nuevo sus prerrogativas y se convirtiera en la Instancia Superior para la Realización de los Objetivos de la Revolución, la Reforma Política y la Transición democrática (ISROR) integrada por 155 miembros⁵. El ISROR se dividió en varias instancias para preparar la primera fase de la transición, ocupando un lugar central en la agenda la preparación de las elecciones de la Asamblea Constituyente que finalmente se celebraron en octubre de 2011.

Tras la celebración de las elecciones del 23 de octubre 2011 y la formación del gobierno de la troika⁶ liderado por el partido islamista Ennahda, vencedor en las elecciones, el papel de la sociedad civil en el proceso de transición ha entrado en una nueva fase marcada por la confrontación y la vigilancia de unas acciones gubernamentales interpretadas como la voluntad de establecer un nuevo poder hegemónico y una imposición de un determinado modelo de sociedad. El proceso de redacción de la nueva Constitución, finalmente adoptada en enero de 2014, ilustra la lucha constante de las OSC para que el nuevo texto garantice y proteja los derechos humanos y las libertades fundamentales. Basta con comparar el texto finalmente adoptado con las versiones anteriores para darse cuenta del impacto de las presiones ejercidas por la sociedad civil para defender los derechos de las mujeres y otras libertades fundamentales amenazadas por las fuerzas políticas en el gobierno.

Las organizaciones de defensa de los derechos de las mujeres han estado particularmente activas para evitar que se cuestionen sus derechos y que la nueva Constitución garantice estos derechos. Organizaciones como la ATFD o la Asociación de Mujeres Tunecinas para la Investigación y el Desarrollo (AFTURD) entre muchas otras, participaron activamente en la ISROR. Esta última ha aprobado el artículo 16 del decreto ley relativo a la elección de la Asamblea Nacional constituyente que prevé que todas las listas deben obligatoriamente ser paritarias y hacer figurar en alternancia candidatos masculinos y femeninos. A pesar de que los resultados electorales hayan mostrado la ingente tarea que queda por delante, sólo 49 mujeres han sido elegidas (42 del partido de Ennahda) de los 217 miembros⁷, la Constitución adoptada en 2014 reconoce la igualdad de género y la obligación del Estado de velar y proteger los derechos y libertades individuales de las mujeres (artículo 20). Reconoce

también el principio de discriminación positiva para la participación de las mujeres en el ámbito político (artículo 33).

Una de las cuestiones pendientes para la sociedad civil organizada es hacerse eco de las reivindicaciones de justicia social claramente expresadas en los levantamientos populares en Túnez como en otros países a principios de 2011. La primavera tunecina puso en evidencia el fracaso del supuesto modelo de “éxito económico” de Túnez y destapó las profundas desigualdades económicas y sociales, el desempleo y la exclusión, principalmente entre los jóvenes, la fractura regional, la precarización del trabajo, la corrupción y el intervencionismo creciente en la economía de los allegados al poder (Hibou, Meddeb, Hamdi, 2011). Siguen siendo estos los puntos débiles del proceso de transición en Túnez, que puede verse amenazado si no mejoran las condiciones económicas y sociales del país⁸. Algunas de las OSC tunecinas prestan especial atención a las reivindicaciones económicas y sociales de las regiones más marginadas del país. Es el caso del Forum Tunisien des Droits Économiques et Sociaux (FTDES) que ha creado un observatorio sobre los movimientos sociales cuya misión es analizar estos movimientos y, en su caso, acompañarlos mediante un trabajo de incidencia política⁹.

El enfrentamiento de la sociedad civil con el gobierno entró en una nueva fase después de los asesinatos políticos de los dirigentes de partidos de la oposición, Chukri Belaid y Mohammed Brahimi (en febrero y julio de 2013). La sociedad civil empezó a movilizarse para frenar lo que interpretaron como un intento de Ennahda de imponer su modelo de sociedad a toda costa. El contexto regional con la caída de Morsi en julio de 2013 junto con las grandes movilizaciones de la sociedad civil tunecina llamando a la dimisión del gobierno y la formación de un nuevo ejecutivo de corte tecnócrata han hecho retroceder al partido islamista que finalmente aceptó la hoja de ruta propuesta por el grupo de negociación formado por cuatro grandes actores de la sociedad civil: UGTT, UTICA, LTDH, y abogados. La sociedad civil tunecina está teniendo un papel singular en el proceso de transición: ante la debilidad de los partidos políticos está teniendo un gran protagonismo en el escenario político tanto por su labor de vigilancia y denuncia como de protesta, sensibilización y movilización en aras de garantizar el éxito del proceso democrático en un marco de transparencia¹⁰. Desde 2011 surgieron en Túnez muchas iniciativas de la sociedad civil volcadas en el proceso de construcción del nuevo marco institucional como L'Assemblée Constituante Civile (ACC)¹¹, la plataforma Bawsala y el colectivo-red Dusturna (Ossorio, Cerrolaza, Ketiti, García Luengos, 2013).

III. Sociedad civil y regímenes autoritarios: el caso argelino

En el 2008 Argelia contaba con 81.000 asociaciones censadas. Este número, sin embargo, no es un indicador fiable a la hora de valorar el dinamismo de la sociedad civil argelina. La falta de independencia de la mayoría de las asociaciones junto con las trabas legales y administrativas, siguen dificultando la emergencia de una sociedad civil autónoma (Thieux, 2009). El régimen argelino ha ido adoptando una estrategia de “tira y afloja”, de división y de clonación de las OSC para neutralizarlas. Para contrarrestar la influencia de los sindicatos autónomos así como de otras organizaciones de derechos humanos, el régimen argelino ha tratado de crear organizaciones similares bajo su tutela para sembrar la confusión entre las personas afiliadas, creando disidencias, manipulando a los militantes más oportunistas o más frágiles¹². Es una estrategia destinada a debilitar a estas organizaciones en términos tanto de apoyos internos como externos. En esta situación de vulnerabilidad la sociedad civil argelina se enfrenta a una nueva etapa, ya que Argelia, al igual que los demás países de la región, reúne las condiciones que propiciaron los levantamientos populares durante la primavera de 2011.

Argelia no ha quedado inmune ante el viento de protesta asolando la región. El nivel de descontento popular en Argelia lleva décadas manifestándose de forma espontánea y localizada en todos los rincones del país. En el año 2010, fueron registradas 11.500 revueltas en Argelia, poniendo de manifiesto el grado de frustración y malestar de los argelinos. Desde entonces, las revueltas y las manifestaciones son frecuentes y afectan a todo el territorio nacional y más particularmente al Sur del país (como es el caso de las manifestaciones de Ouargla en marzo de 2013 o las de Laghouat en el 2012).

Sin embargo, este descontento social que se manifiesta de forma localizada y fragmentada no ha cuajado en un movimiento de contestación política. El trauma causado por la cruenta guerra civil de los noventa que acabó con la vida de unas 200.000 personas, explica porqué en Argelia la barrera del miedo es más difícil de franquear. El régimen utiliza, además, la actual situación regional para reforzar este anhelo por la estabilidad y el miedo al caos. A modo de ejemplo, durante la última campaña electoral para la reelección —sin sorpresas— de Abdelaziz Buteflika, la televisión pública ha puesto especial énfasis en transmitir imágenes de Siria, Libia y Egipto. La década negra ha provocado también una profunda desintegración social y la sociedad civil ha quedado diezmada, fragmentada y muy debilitada. Su recomposición a partir del año 2000, en un contexto represivo es complicada y

su arraigo popular, más allá de los principales núcleos urbanos del norte del país, casi inexistente. Las estructuras tradicionales partidistas o asociativas que componen la sociedad civil argelina tienen muchas dificultades en implicar y movilizar a la juventud. De acuerdo con un estudio realizado por el Rassemblement Action Jeunesse (RAJ) tan solo el 4,7% de los jóvenes que participaron en la encuesta se habían adherido a un proyecto asociativo¹³.

La fragmentación de la sociedad civil y la falta de credibilidad de los partidos políticos dificultan la emergencia de estructuras organizadas capaces de orientar y dirigir un movimiento de contestación política amplio. Al calor de la primavera árabe, algunas organizaciones lo intentaron a través de la plataforma Coordinación Nacional para el cambio y la democracia, agrupando a distintos partidos y sindicatos. Sin embargo, el intento no prosperó: la manifestación convocada en Argel en febrero de 2010, sólo consiguió congregarse a unas 3.000 personas frente a un despliegue de 30.000 policías. La plataforma se escindió a las pocas semanas de su creación por las fuertes divergencias ideológicas existentes en su seno¹⁴.

Contando con importantes recursos procedentes del sector energético, el régimen ha tratado de evitar lo sucedido en los países vecinos a través de la redistribución de la renta mediante el incremento de salarios y el anuncio de reformas políticas: apertura de los medios audiovisuales al sector privado, reforma de la ley de prensa, medidas para fomentar la participación política de las mujeres, lucha contra la corrupción, ley sobre los partidos políticos, adoptada en diciembre de 2011¹⁵.

Estas aparentes señales de apertura esconden a duras penas la voluntad del régimen de limitar aún más el campo de maniobra de la sociedad civil en Argelia. La nueva Ley aprobada por la Asamblea Nacional Popular del 13 de diciembre de 2011, introduce disposiciones represivas tanto para la creación de nuevas asociaciones como para las existentes, pues impone a las asociaciones solicitar una autorización previa a la administración mientras antes era suficiente la realización de una simple declaración. La nueva ley refuerza también los mecanismos de control sobre la financiación externa de las asociaciones¹⁶.

A pesar de que el régimen haya tratado de contener los levantamientos populares a base de represión y a través de la redistribución de recursos, las protestas sociales procedentes de diferentes sectores (jóvenes, sector público) con huelgas y reivindicaciones salariales siguen. En Ouargla y otras ciudades del sur de Argelia se han contabilizado cerca de 5.000

manifestaciones y disturbios en el primer semestre de 2013. El Comité National pour La Défense des Droits des Chômeurs (CNDDC), un movimiento que ha conseguido canalizar las frustraciones de muchos jóvenes desempleados en el Sur, ha tenido un creciente protagonismo y ha conseguido visibilizar el profundo malestar de la población sureña. En la región del M'zab, las tensiones sectarias han desembocado en violentos enfrentamientos entre la minoría ibadí (también conocida como mozabitos en esta región) y la mayoría compuesta de comunidades musulmanas suníes.

Al mismo tiempo, las autoridades proceden generalmente a la represión de estas manifestaciones mediante un uso desproporcionado de la fuerza. Las manifestaciones del movimiento Barakat (Ya basta) que surgió para protestar contra el cuarto mandato de Buteflika, han sido sistemáticamente reprimidas. Intentaron organizar un sit-in delante de la Faculté Centrale de Argel la víspera de la celebración de las elecciones del 17 de abril de 2014, sin llegar a conseguirlo por la presencia masiva de las fuerzas de seguridad que empezaron a impedir a los manifestantes acceder al lugar previsto.

El amordazamiento de la sociedad civil no hará sino incrementar la presión: se estima la tasa de desempleo de los jóvenes entre el 20 y 25%, así como el mal estado de las principales infraestructuras, la falta de alojamiento, las deficiencias de los servicios sociales y las injusticias y desigualdades generadas por un sistema donde prima la corrupción y el clientelismo.

En general, la violencia que caracteriza los modos de gestionar los conflictos por parte de las autoridades han debilitado profundamente los vínculos sociales. El marco jurídico y las prácticas administrativas represivas limitan mucho la capacidad de las OSC y las asociaciones vinculadas a la incidencia política, defensa de los derechos humanos u otras temáticas (justicia transicional respecto a la década negra), que son sistemáticamente vigiladas e infiltradas por los servicios de inteligencia. A pesar de este entorno hostil al desarrollo de una sociedad civil autónoma y unida capaz de presentar un frente de oposición al sistema, nuevas formas de movilización están surgiendo a través de estructuras más informales como Algérie plurielle, Citoyen Algérien libéré, J'accuse que surgieron durante la intensificación de las protestas en el 2011 o como el movimiento "Barakat".

IV. Marruecos: sociedad civil e incidencia política

Marruecos comparte muchos de los ingredientes económicos, políticos y sociales que han propiciado las movilizaciones populares contra las dictaduras en Túnez y en Egipto. Las reformas emprendidas por Mohamed VI siguen siendo limitadas y no han alterado los fundamentos del sistema político y las prerrogativas de una monarquía que ha ido consolidando su imperio económico¹⁷.

Al mismo tiempo, el país se enfrenta a graves problemas socio-económicos a consecuencia de las políticas neoliberales que no han permitido un reparto equilibrado y justo de las riquezas ni una mejora de los servicios sociales básicos. El rey adoptó algunas medidas como la Iniciativa de Desarrollo Humanos (INDH), permitiendo la expansión del tejido asociativo volcado en la prestación de servicios para paliar, en parte, los déficits del sector público en este ámbito (García Luengos, 2013). La monarquía ha sabido instrumentalizar, cooptar o reprimir a la sociedad civil, amoldándola a sus intereses. Aunque el régimen haya liberalizado en parte el régimen legal del estatuto de las asociaciones, permitiendo así un incremento sustancial de la sociedad civil tanto islamista como liberal, permanecen numerosas disposiciones legales que, según el caso, permiten a la administración controlar y, en su caso, bloquear los proyectos asociativos que no coincidan con sus intereses. Varios informes y testimonios han puesto en evidencia que desde 2012, coincidiendo también con un debilitamiento del movimiento 20 de Febrero, el régimen está imponiendo aún más restricciones a las libertades de asociación, expresión y reunión de los actores que cuestionan su legitimidad (militantes del 20 de febrero, miembros del movimiento justicia y espiritualidad, defensores de los derechos humanos...).

Las “revoluciones tunecina y egipcia” alentaron la emergencia de nuevas dinámicas de protesta en la sociedad marroquí con la aparición en el escenario político del movimiento del 20 de febrero que ha servido de catalizador para impulsar nuevas modalidades de movilización colectiva, así como la creación de nuevos grupos de protesta. Aún así, no ha conseguido una articulación entre las diferentes resistencias y aspiraciones sociales para convertirse en una fuerza de acción colectiva representativa de los diferentes sectores sociales. Se trata de un movimiento horizontal, constituido como una suma de movimientos locales sin jerarquía ni portavoz, un movimiento no estructurado desde arriba, permitiendo así la implicación de diferentes sectores. Desde el inicio ha contado con el apoyo de las

organizaciones de la sociedad civil como la Asociación Marroquí de los Derechos Humanos (AMDH) y otras organizaciones de derechos humanos.

El movimiento del 20 de febrero, pues, ha contribuido a impulsar nuevas dinámicas: han sido creados nuevos grupos de protesta y organizaciones. La utilización de internet como medio de denuncia y como espacio de movilización colectiva en torno a causas comunes es uno de los motores de este nuevo tipo de activismo en Marruecos, donde están bien implantadas las redes sociales: el país cuenta dos millones de usuarios de Facebook. Ha aparecido un espacio contracultural con la aparición de movimientos artísticos como Nayda y otros colectivos como el *Mouvement alternatif pour les libertés individuelles* (MALI) que contribuyen a introducir nuevos debates culturales y sociales en el seno de la sociedad marroquí sobre cuestiones relativas a las libertades individuales (Sisi Hida, 2011). Han surgido también iniciativas como la “Fabrique culturelle” una iniciativa de artistas marroquíes para rehabilitar los antiguos mataderos de Casablanca y convertirlos en un espacio de creación artística, abierto y accesible a todos y a todas las formas de arte contemporáneo.

En los últimos dos años en Marruecos se ha podido observar una mayor tendencia a la ocupación del espacio público y una menor tolerancia frente a los desagrazos de la autoridad. En 2013 la dinámica de movilización se ha mantenido y todas las regiones han presenciado manifestaciones, marchas, sit-in de diferentes colectivos expresando diversas reivindicaciones. La lista de los colectivos que han ocupado el espacio público para expresar su descontento o sus reivindicaciones es muy larga: los militantes del 20 de Febrero, los diplomados desempleados, las protestas populares espontáneas por la falta de acceso a bienes e infraestructuras básicas (salud, saneamiento, educación), las mujeres de las tierras colectivas “soulaliyyates”, los profesores de la educación secundaria, jueces y abogados....

Algunos actores de la sociedad civil han asumido también un rol de mediación en los conflictos sociales. A modo de ejemplo podemos citar el caso de Imider, una localidad de la región de Ouarzazate, en el sureste del país, donde los habitantes han iniciado desde hace dos años un sit-in permanente para bloquear el acceso a la mina explotada por la empresa estatal MANAGEM para reivindicar mejoras económicas para la región y contra la explotación de los recursos hídricos y su contaminación. El sit-in ha sido reprimido, junto a algunos de sus líderes, pero frente a la fuerza de una protesta muy bien organizada y que ha movilizado todos los vecinos, las autoridades marroquíes han recurrido también a la sociedad civil organizada para mediar en el conflicto. La concertación entre la red asociativa para el desarrollo y la democracia de Zagora (RAZDED) y el Forum des alternatives Maroc

(FMAS), y el grupo MANAGEM desembocó en un acuerdo mediante el cual la compañía se compromete a dedicar un presupuesto de 5 millones de dirhams a proyectos de infraestructuras (transporte escolar, salud, acceso al agua potable y creación de proyectos generadores de ingresos¹⁸).

Reforma política y rol de la sociedad civil

La Constitución adoptada en 2011 concede un papel importante a la sociedad civil en la gestión de las políticas públicas. El artículo 12 estipula: “las asociaciones contribuyen, en el marco de la democracia participativa a la elaboración, aplicación y evaluación de las decisiones y de los proyectos de las instituciones elegidas y los poderes públicos”. En el artículo 13 se estipula que los poderes públicos propiciarán la creación de instancias de concertación con el fin de asociar los diferentes actores sociales en la elaboración y aplicación de las políticas públicas. Sin embargo la creación de estas instancias ha generado cierto recelo por parte de algunas organizaciones. Ha sido el caso, por ejemplo, de la creación de la Comisión nacional encargada del diálogo con la sociedad civil, a cargo del nuevo Ministerio de Relaciones con el Parlamento y la Sociedad Civil, que ha provocado el rechazo de 400 asociaciones. Éstas han criticado su falta de representatividad (al formar parte de dicha comisión una serie de personas y expertos que no tienen legitimidad ni cualificación profesional, mientras que se han excluido otras que son una referencia en el movimiento de los derechos humanos). También han destacado la ausencia de verdaderos mecanismos de concertación con los representantes de la sociedad civil. Aun así, la iniciativa ha seguido y en marzo de 2013, el gobierno marroquí inició un diálogo nacional con la sociedad civil con el fin de analizar las nuevas disposiciones constitucionales relativas a la sociedad civil; de reflexionar sobre las modalidades de puesta en conformidad del el corpus jurídico marroquí, y de elaborar una carta nacional de la democracia participativa. Se han llevado a cabo coloquios regionales (16 regiones de Marruecos y cinco visitas a las comunidades marroquíes en el extranjero)¹⁹. No obstante, la apertura de estos espacios de diálogo institucional no ha sido acompañada por unas mejoras efectivas en el ámbito de los derechos humanos, hecho que genera mucha desconfianza por parte de la sociedad civil que percibe la participación en estos espacios como un riesgo de cooptación y desvío de su agenda de trabajo por procesos que no conducen a cambios sustanciales.

Las organizaciones de la sociedad civil que han rechazado participar a esta iniciativa han respondido con una nueva iniciativa: “l’Appel de Rabat”, el Llamamiento de Rabat que ha

lanzado una dinámica paralela de diálogo de la sociedad civil en el marco de la cual se han organizado encuentros locales y regionales que han culminado en un encuentro nacional a finales de noviembre de 2013 en Bouznika. El objetivo era la creación de un espacio de reflexión sobre los valores democráticos, los derechos humanos y las libertades individuales y colectivas, los desafíos respecto a la aplicación de las nuevas disposiciones constitucionales respecto a la sociedad civil, la reforma de la ley de asociación, la dimensión financiera y fiscal de las asociaciones y el refuerzo de las capacidades de las asociaciones²⁰.

Conclusiones

Las OSC realizan una labor fundamental en diferentes ámbitos y contribuyen a transformar los parámetros que caracterizan las relaciones entre el ciudadano y las instituciones y gobiernos. Las organizaciones de derechos humanos o de defensa de los derechos de las mujeres realizan una labor imprescindible de denuncia de las prácticas autoritarias y de defensa de las libertades públicas. La sociedad civil, desde su diversidad de cometidos, contribuye también a la gestación de una cultura de reivindicación y de derechos humanos. Desde el inicio de las llamadas “primaveras árabes”, las dinámicas de movilización ciudadana se han transformado y la idea de participación ha calado hondo entre amplios sectores de las sociedades interesadas y, principalmente, entre los jóvenes. En el caso de Túnez, la sociedad civil está desempeñando un papel central en la construcción del nuevo marco institucional: de vigilancia, de mediación y también de propuesta. Los regímenes que, como en el caso de Marruecos, han iniciado un proceso de reforma, han tratado de implicar a la sociedad civil para legitimar su voluntad de avanzar hacia sistemas políticos más plurales y democráticos. Las OSC son también actores clave en los procesos de mediación con la ciudadanía.

El rol que las OSC desempeñen en los procesos de democratización está muy condicionado por el régimen y las estrategias utilizadas por el poder para intentar controlar sus actividades. En entornos políticos adversos como el argelino, las estrategias represivas y de cooptación consiguen neutralizar la capacidad contestataria de la sociedad civil.

Finalmente, las OSC, tanto en los países que están en la vía de las reformas como en los que aún mantienen regímenes políticos autoritarios, se enfrentan al reto de renovar sus

estructuras y estrategias incorporando a los jóvenes y dando más protagonismo a las mujeres: dos puntos flacos del ámbito asociativo en los países del Norte de África.

Bibliografía

- Barreñada I. (2011). Las revoluciones árabes, la cuestión de la justicia social y el papel de los sindicatos”, *Anuario 2011, Fundación Primero de mayo*, (pp.261-277).
- Beinin, J. (2011). A workers' social movement Egypt. En Beinin, J. y Vairel, F. (Eds.), *Social movements, mobilizations and contestation in the Middle East and North Africa* (pp.181-217). Stanford University Press.
- Beinin, J. y Vairel, F. (Eds.). (2011). *Social movements, mobilizations and contestation in the Middle East and North Africa*, Stanford University Press.
- Ben Néfissa, S. (2011). Révolution et société civile en gestation. *Humanitaire*, nº29 recuperado de <http://humanitaire.revues.org>
- Chouikha, L y Geisser, V. (2010). Retour sur la révolte du bassin minier. Les cinq leçons politiques d'un conflit social inédit. *L'Année du Maghreb*, VI, 415-426. Recuperado de <http://anneemaghreb.revues.org/923> ; DOI : 10.4000/anneemaghreb.923
- Elagati, M. (2012). Civil Society in Egypt and the Revolution of 25th January: What Role for the EU?. *Focus, IEMED*, mayo. Recuperado de: <http://www.iemed.org/observatori/actualitat/opinions/civil-society-in-egypt-and-the-revolution-of-25th-january-what-role-for-the-eu>
- García Luengos, J. (2013). La primavera árabe en Marruecos. La sociedad civil marroquí. En Osorio, A. Cerrolaza, E. Ketiti, A. García Luengos, J y Thieux, L. (coord.). *Sociedad civil y transiciones en el Norte de África, Egipto, Túnez, Argelia y Marruecos*. Barcelona: Icaria editorial- Encuentro Civil Euromed.
- Hibou, B. Meddeb, H. Y Hamdi, M. (2011). Túnez y su economía política y social tras los acontecimientos del 14 de enero. Los retos de una reconfiguración de la política europea. Informe de la Red Euromediterránea de Derechos Humanos (REMDH), recuperado de international.blogs.ouest-france.fr/media/00/01/1133020722.pdf
- International Crisis Group (2011): “Soulèvements populaires en Afrique du Nord et au Moyen-Orient (IV): La voie tunisienne”, *Middle East/North Africa Report* N°106 28. Recuperado de <http://www.crisisgroup.org/fr/regions/moyen-orient-afrique-du-nord/afrique-du-nord/Tunisia/106-popular-protests-in-north-africa-and-the-middle-east-iv->

tunisias-way.aspx

López García, B. (2011). La centralidad de la Central (la UGT en la revolución tunecina), "Crisis en el mundo árabe", *ARI del Real Instituto Elcano*, nº 26, recuperado de http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_es/especiales/crisismundoarabe/respuestacrisis/notasocma/observatorio_bernabe_ugt_revuelta_tunecina

Oberschall, A. (1973). *Social Conflict and social movements*. Englewood Cliffs: Prentice Hall.
Osorio, A. Cerrolaza, E. Ketiti, A. García Luengos, J y Thieux Laurence (coord.). (2013). *Sociedad civil y transiciones en el Norte de África, Egipto, Túnez, Argelia y Marruecos*. Barcelona: Icaria editorial- Encuentro Civil Euromed.

Sisi Hida, B. (2011). Mobilisations collectives à l'épreuve des changements au Maroc. En Ben Néfissa, S. Y Destremau, B. (Eds). *Protestations sociales, révolutions civiles, transformations du politique dans la Méditerranée arabe*, (pp.163-189) *Revue du Tiers Monde, hors série*.

Thieux, L. (2009). Le secteur associatif en Algérie: la difficile émergence d'un espace de contestation politique. *L'Année du Maghreb*, Paris: CNRS, éditions. Recuperado en <http://anneemaghreb.revues.org/545> ; doi: 10.4000/anneemaghreb.545

Notas

¹ En otoño de 2000 20 ONG e intelectuales de la izquierda organizaron el Comité Popular de Solidaridad con la Intifada Palestina que empezó a organizar manifestaciones públicas con cada vez más frecuencia

² En el 2007 el Banco Mundial consideraba a Egipto como una de los primeros del mundo en materia de reformas económicas

³ Aparecieron organizaciones de apoyo a los trabajadores como el Hisham Mubarak Law Center, New Women Foundation, Coordinating Committee for the Union and workers rights and liberties. De allí surgieron las primeras iniciativas de creación de sindicatos independientes (Independent General Union of Real State tax authority workers reconocido por el gobierno en abril de 2009.

⁴ Formaron parte del Frente del 14 de enero varias agrupaciones de izquierda como la Ligue de la gauche travailliste, el Mouvement des Unionistes Nassériens, Mouvement des Nationalistes Démocrates (Al-Watad) el PCOT (Parti Communiste des Ouvriers de Tunisie) y el PTPD (Parti du Travail Patriotique et Démocratique) entre otros.

⁵ La central sindical UGTT, los partidos de izquierda y el movimiento islamista Nahda, 12 partidos políticos y 18 organizaciones sindicales y asociativas así como otras personalidades y representantes de las regiones, jóvenes y familias de los mártires.

⁶ El Gobierno de Túnez fue formado por una coalición de tres partidos o "troika" después de que el partido islamista Al Nahda ganara las elecciones de octubre del 2011, asociándose con el Congreso Por la República (CPR), del presidente del país, Moncef Marzuki, y con el Foro Democrático por el Trabajo y las Libertades Al Takatol, del presidente de la ANC, Mustafá Ben Yafaar.

⁷ Ver al respecto: *Maghreb Émergent*, 29/10/2011 en: <http://www.maghrebemergent.info/actualite/maghrebine/5974-tunisie-49-femmes-a-lassemblee-constituante-42-sont-islamistes.html>

⁸ Ver al respecto el informe: Tunisie : relever les défis économiques et sociaux, Rapport Moyen-Orient/Afrique du Nord N°1246 juin 2012, consultado en <http://www.crisisgroup.org/fr/regions/moyen-orient-afrique-du-nord/afrique-du-nord/Tunisia/124-tunisia-confronting-social-and-economic-challenges.aspx>

⁹ Para más información ver: <http://www.ftdes.net/sites/default/files/Newsletter%20janvier%202014.pdf>

¹⁰ Para más información ver la página web del colectivo Doustourna: www.doustourna.org

¹¹ Para más información ver <http://www.constituantecivile.sitew.com/>

¹² Ha sido el caso con el CNAPEST (Consejo Nacional Autónomo de Profesores de la enseñanza secundaria que tras 7 años de actividades obtuvo su legalización coincidiendo con la creación por el poder de una organización muy similar el SNAPEST. La misma estrategia ha sido replicada por el SNAPAP el SATEF.

¹³ Ver *L'Expression*, 4/10/2012 consultado en <http://www.lexpressiondz.com/actualite/161474-40-des-jeunes-votent.html>

¹⁴ La plataforma agrupaba a varias de las viejas figuras del sistema desde Sid Ahmed Ghazali (que era primer ministro durante la presidencia de Chadli Benyedid en 1991), a Said Saadi de la Reagrupación para la Cultura y la Democracia RCD, un partido que apoyó el golpe de los generales que acabó con la experiencia de democratización de los años 90; la Liga Argelina de los Derechos Humanos (LADDH) junto con varios sindicatos autónomos.

¹⁵ La ley de partidos políticos prohíbe a cualquier persona responsable de "la explotación de la religión que haya conducido a la tragedia nacional (guerra de los 90) de fundar un partido político o participar en su creación. Ver *Le Monde*, 1/1/2012, en http://www.lemonde.fr/afrique/article/2012/01/02/algerie-la-revolte-si-loin-si-proche_1622428_3212.html

¹⁶ Ver <http://www.euromedrights.org/>

¹⁷ De acuerdo con la revista Forbes la fortuna del Rey habría sido multiplicada por 5 entre el año 2000 y el año 2009 ver: <http://www.courrierinternational.com/article/2009/07/09/mohammed-vi-un-roi-en-or-massif>

¹⁸ Entrevistas realizadas a diferentes actores de la sociedad civil marroquí entre febrero y marzo 2014: Mohamed Lemaizi (ATTAC), Hassan Hatab (Observatoire des Libertés Publiques), Kamel Lahbib (Forum des Alternatives y Abdelhak Benzekri (AMDH).

¹⁹ Declaración de Choubani en el marco del encuentro de Kenitra el 20 de noviembre de 2013 (consultado en www.maroc.ma)

²⁰ Para más información ver: <http://www.espace-associatif.ma/l-Appel-de-Rabat-Conference-de?lang=fr>

Laurence Thieux es Doctora en Estudios Árabes e Islámicos, Universidad Autónoma de Madrid. Es investigadora asociada del Grupo de Estudios sobre las Sociedades Árabes y Musulmanas (GRESAM) de la Universidad de Castilla la Mancha, y del Taller de Estudios Internacionales Mediterráneos (TEIM) en el marco del cual leyó su tesis doctoral "La guerra civil argelina y su impacto sobre la política exterior de Francia y Estados Unidos (1991-1999)" en el 2002. Es investigadora del thinktank Researchon Security and Transnational Governance (RESET). Este artículo se enmarca en los resultados del proyecto de investigación "Nuevos espacios, actores e instrumentos en las relaciones exteriores de España con el mundo árabe y musulmán" (CSO2011-29438-C05-02) financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad.

laurence.thieux@resetweb.org